



## Prólogo

Prologue

**Dra. Maria Inmaculada Sánchez Barrios**

Profesora titular de derecho procesal  
Directora de la Unidad de Igualdad  
Universidad de Salamanca (España)

[misaba@usal.es](mailto:misaba@usal.es)

Constituye para mí un honor prologar este número de la Revista TraHs, de la RED ALEC (Red Internacional América Latina, África, Europa y el Caribe), de la Universidad de Limoges (Francia), versado sobre un tema preocupante y de máxima actualidad: la problemática de los adultos mayores, bajo el título concreto de “ADULTAS Y ADULTOS MAYORES: ¿POBLACIÓN VULNERABLE?”

Agradezco a la directora de la revista, la Dra. Dominique Gay-Sylvestre, y a la coordinadora de este número especial, la Dra. Hilda Eleonora Vallet, que hayan pensado en mí para llevar a cabo esta labor.

La temática de las adultas y los adultos mayores (ancianas y ancianos) va ligada al concepto de “vulnerabilidad”, ya que estas personas pueden presentar mayores riesgos de recibir alguna lesión de carácter físico o moral, o financiero e incluso sexual, que otros colectivos de personas.

Debe partirse de la base de que la posible situación de vulnerabilidad procede frecuentemente del exterior, es decir, se trata de una situación extrínseca - en contraposición a los supuestos de “debilidad”, que es una cualidad intrínseca de las personas. Así pues, nos estamos refiriendo a que los mayores son especialmente vulnerables y esa situación de vulnerabilidad muchas veces les viene de fuera, de otras personas que pueden lesionarlos empleando cualquier fórmula (física, moral, psicológica...)

Podría pensarse que ambos conceptos -“vulnerabilidad” y “debilidad”- van indisolublemente unidos y, aunque es lo más frecuente, no siempre es así. Existen grupos vulnerables sin que las personas que los constituyen sean consideradas débiles ni especialmente frágiles, aunque también es verdad que los más débiles son, en la mayoría de los casos, los más susceptibles de sufrir lesiones externas y, por lo tanto, de encuadrarse en grupos calificados como vulnerables, como ocurre con frecuencia en el caso de las personas ancianas.

Fijándonos en diferentes momentos a lo largo de toda la Historia de la Humanidad podemos observar que se han repetido determinados comportamientos en los que han resultado lesionados grupos vulnerables de personas y que ello ha sucedido por la carencia de protección jurídica de los mismos. Al no tener una adecuada protección acorde a sus características, a sus especiales circunstancias, se han producido dichas lesiones. Las normas jurídicas no se han preocupado por esas personas o no han sabido hacerlo adecuadamente.

Las adultas y los adultos mayores pueden empezar a padecer, especialmente a partir de determinadas edades avanzadas, diferentes tipos de discapacidades (físicas, sensoriales, psíquicas) - dejando al margen que determinadas personas ya las padezcan desde su nacimiento o a raíz de una enfermedad o de un accidente. Y

debido a ello no pueden gestionar debidamente su persona ni sus bienes, es decir, no pueden velar por sus intereses.

Las normativas existentes, la internacional y la interna de la mayor parte de los países, se han olvidado durante demasiado tiempo de las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores. La ONU tomó en consideración a varios grupos especialmente vulnerables como son los niños, las mujeres y las personas con discapacidad, sobre los que ha venido proyectando su protección y no lo hizo sobre otros colectivos. Los derechos de las personas mencionadas han sido reconocidos de forma específica, aunque también es cierto que ello ha influido en la protección de otros grupos, de tal forma que también se van especificando derechos concretos para otros grupos vulnerables, por ejemplo, por razón de edad.

En esta materia consideramos fundamental referirnos a dos normas internacionales: el Convenio sobre Protección de Adultos (La Haya, 2000) y el Convenio de Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 2006).

En el art. 1 del primer texto se determina quienes son los destinatarios del Convenio: “adultos que, por una disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de velar por sus intereses”, regulando medidas de protección (determinación de incapacidad, institución de un régimen de protección, nombramiento de un representante y sus funciones...) y la competencia de los Estados al respecto, determinando la autoridad que puede adoptar esas medidas...

Por su parte, el Convenio de Derechos de las Personas con Discapacidad recoge diferentes principios de protección que versan sobre la autonomía e independencia de las personas, el respeto a la dignidad de las mismas, la participación plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades...

Existe una circunstancia incontestable y manifiesta: el envejecimiento de la sociedad. La esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años, de tal forma que, por ejemplo, mientras ésta era en la Unión Europea de 73 años en 1990, subió a 79 años en 2005 y en la actualidad es 81,6 años.

Este envejecimiento conduce a una preocupación importante por la vida autónoma y asistida de las adultas y los adultos mayores y por la clara necesidad de obtener una más elevada cohesión social con unas sociedades inclusivas. Por ello debe mejorar la protección jurídica de los mayores, tanto en el ámbito civil como penal e incluso en el administrativo y en el laboral.

Podemos citar en el aspecto civil la búsqueda de medios alternativos al proceso de incapacitación, o medidas adecuadas y efectivas para, por ejemplo, regular las visitas de los abuelos a los nietos cuando no se facilitan éstas por los progenitores. En el ámbito penal realmente no se tiene un conocimiento ajustado de la dimensión real de los malos tratos a las personas ancianas, pero sí es constatable que nos encontramos ante un problema social con cifras preocupantes y en aumento. No existen datos fiables ya que los propios ancianos o no pueden manifestarlo porque sus condiciones físicas o psíquicas se lo impiden, o porque, pudiendo hacerlo, no lo hacen por miedo a represalias de su/s maltrador/es, y debido al hecho también de que los malos tratos se producen frecuentemente en el ámbito de la familia y no desean que trasciendan al exterior. Administrativamente deben igualmente buscarse fórmulas que faciliten y ayuden a desarrollar la vida de estas personas en las mejores condiciones. Y en el orden laboral con fórmulas que garanticen una pensión digna y suficiente, evitando al mismo tiempo una discriminación añadida en el caso de las mujeres.

En el supuesto más grave, en el de las personas mayores maltratadas, según la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, de 2003, el maltrato se define como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana”. Existen varias formas de maltrato: físico, psicológico, financiero, sexual..., o incluso puede, sin más, reflejar una negligencia, ya sea intencional o por omisión. Y lo común a esas diferentes situaciones es la imposibilidad de exteriorizar el problema en la mayor parte de los casos y la carencia de una protección legislativa adecuada.

Vemos que el legislador, y la sociedad, se han venido olvidando con frecuencia de estos asuntos y que ha llegado el momento de que se aborde en toda su extensión.

Este número que ahora tengo el placer de prologar aborda la apuntada problemática de una forma plural. Doce autores, de diferentes procedencias (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia y México), analizan la cuestión desde muy diversas perspectivas, lo cual proporciona una visión amplia, rica y multidisciplinar de la materia.

Se tratan aspectos jurídicos variados, materiales y procesales –tanto civiles, como penales e incluso laborales-, como también otros de carácter más social. Nos referiremos primeramente a los artículos de contenido estrictamente jurídico y después a los que abordan materias puramente sociológicas.

En los diferentes artículos que constituyen este número especial se analizan de forma seria y rigurosa las diversas materias tratadas y, en el caso de las mayoritariamente jurídicas, con constantes referencias legales, algunas jurisprudenciales y numerosas citas doctrinales.

Se introduce así *normativa interna* de cada uno de los países que son objeto de estudio (diversas Constituciones, algunos códigos civiles y penales, leyes de enjuiciamiento, Ley General de Seguridad Social, Estatuto de los Trabajadores, leyes especiales en la materia -Ley Orgánica española para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley francesa sobre la Adaptación de la Sociedad al Envejecimiento, Ley argentina sobre Mediación, Estatuto brasileño del Anciano, Ley chilena sobre Tramitación Electrónica de los Procesos, Ley mexicana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores...-), pero también *normativa internacional* (Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de la persona, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores...). Todo ello sirve de apoyo fundamental a las investigaciones realizadas.

Son varios los trabajos que analizan la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuyas disposiciones conllevan un avance en la tarea de garantizar el acceso a justicia de los adultos mayores, pero también observa que la violencia contra los ancianos sigue creciendo con la consiguiente desatención de su derecho de acceso a un proceso justo.

Algunos artículos plantean la materia de manera más general, realizando un análisis global nacional e internacional para entrar luego en temas más concretos y en otros directamente se analizan aspectos específicos que afectan de manera especial a las adultas y los adultos mayores.

El primero de los trabajos aborda el supuesto del maltrato al adulto mayor, recogiendo situaciones referidas al impedimento de contacto con los nietos, que afecta a todo tipo de adultos mayores, sin distinción de géneros, y a multitud de situaciones y entornos. Y es más, la afectación va más allá de los propios adultos y

alcanza a la otra parte de la ecuación, y de manera especial a sus nietos, niños, niñas y adolescentes, que no han alcanzado la mayoría de edad. Se examinan diversos instrumentos legales internacionales, deteniéndose más tarde, en la situación existente en el sistema jurídico argentino, recogiendo situaciones referidas al impedimento de contacto con los nietos como acto de violencia contra el adulto mayor o la mediación como recurso para el abordaje y mitigación de dicho impedimento.

También se analiza la protección social en la vejez con medidas de acción positiva en la lucha contra la discriminación postlaboral en el caso de las adultas mayores. Debe tenerse en cuenta la brecha de género en materia de protección social, que discrimina a las mujeres en ocasiones por su tardía incorporación al mercado laboral o por las posibles interrupciones ligadas a la maternidad. Tras un planteamiento temático sobre la posible flexibilidad en la determinación de la edad de jubilación, se delimita la perspectiva de género en el tratamiento de la problemática que afecta a las trabajadoras de edad, efectuándose una valoración crítica de los aciertos o errores cometidos en estos últimos años a nivel legislativo en el ordenamiento jurídico español, también con alguna referencia jurisprudencial, analizando las transformaciones sociales y sus repercusiones en materia de género, las cotizaciones ficticias o la maternidad y su valor como elemento de “contributividad”.

Otro de los trabajos nos presenta desde México una propuesta sugerente de creación de un nuevo Derecho Procesal “Geriátrico”, al entenderse que, para poder hablar de un real acceso a la justicia de los y las personas adultas mayores, se necesitan procedimientos que sean mucho más ágiles y con mayor rapidez, incluso que en la vía sumaria y sin tantos requisitos formales. Podría pensarse en la conciliación procesal, y en su caso mediación, buscando un nuevo modelo de Administración de Justicia al servicio de esta nueva generación de ancianos cada vez más numerosa. Se propone una duración máxima breve del procedimiento, excluir plazos extraordinarios, fijar fechas breves de audiencia y presentación de pruebas, resolución de incidentes en una sola audiencia sin mayor trámite que ser oídas las partes, utilización de un lenguaje sencillo, sin formalismos...

Una materia trascendental que también se aborda es la referida a los malos tratos a la Tercera Edad desde la perspectiva del Derecho penal y de la Criminología, apuntándose algunos datos fundamentales como es el de la “invisibilización” del mismo. Se realiza un estudio estadístico de la victimización de adultos mayores en España aportándose diferentes tablas (con porcentajes de población adulta, delitos en los que son víctimas los adultos mayores, mayores como víctimas de la violencia doméstica...). El Código penal español no tiene una referencia directa a la cuestión de la ancianidad, aunque sí contempla vulnerabilidades que pueden ser debidas a la edad (minoría de edad básicamente) o la incapacidad. Pero el Derecho penal debe ser la *última ratio*, el último instrumento a seguir, lo que debe hacerse es aplicar más políticas sociales orientadas a resolver estas situaciones.

Materia de gran actualidad es la referente al acceso a la justicia de los adultos mayores y la brecha digital existente. El desarrollo de los modelos de e-Justicia requiere que todas las personas puedan utilizar las tecnologías de la comunicación y la información (TIC), pero las personas de más edad tienen verdaderas dificultades para hacerlo. El Plan Estratégico 2018-2022 de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) promueve la inclusión digital, prestando especial atención en la población con mayor dificultad de acceso, entre ellas las personas mayores, lo que se analiza desde una perspectiva internacional y también desde el derecho interno chileno, de manera especial cómo repercute esta brecha etaria en el acceso a la justicia.

Aparte de los artículos estrictamente jurídicos, otros se refieren a aspectos sociales, o presentan una combinación de ambos, como es el caso del trabajo que analiza la protección de los derechos sociales y las garantías constitucionales con respecto a las personas ancianas, con especial referencia al envejecimiento de la población en Brasil, su vulnerabilidad y sus particularidades. Tomando como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de la Persona descende a la regulación que realiza el Estatuto del Anciano en ese país y el papel de sus Consejos Municipales del Anciano, que han propiciado un avance en la gestión y las políticas sociales, haciendo uso de datos estadísticos de los últimos años, reflexionando sobre la asistencia en materia de salud, vivienda o participación social.

Lo mismo sucede con el trabajo que se dedica al estudio en Francia de las personas mayores y su vulnerabilidad. El Preámbulo de la Constitución Francesa garantiza a todos, especialmente a los más vulnerables -entre los que se encuentran los trabajadores mayores-, la protección de la salud, la seguridad física, el descanso y el ocio. ¿Pero necesitan una protección más especial? ¿Se sienten vulnerables y lo son realmente? Las personas mayores cada vez viven más y son menos frágiles y vulnerables en Francia, al igual que en otros países desarrollados, aunque no tienen peso en el diálogo social. Aparece una nueva categoría de ciudadanos: los ancianos autónomos, sanos, que no desean ser categorizados como “viejos”. En 2016 entró en vigor la Ley sobre la Adaptación de la Sociedad al Envejecimiento, que actualiza algunas medidas ya vigentes y propone mejorar la vida cotidiana de las personas de edad y sus parientes y cuidadores, aunque debemos prestar atención a la situación real y darnos cuenta de que aunque algunas personas mayores están condenadas a dobles, triples o incluso más condenas (debilidad financiera, enfermedades crónicas, marginación social y dificultades para acceder a la atención o a los servicios de asistencia), las clasificaciones sociales pueden ser la puerta de entrada a la estigmatización. Es necesario construir una sociedad inclusiva en el futuro.

Conjugando también aspectos jurídicos y sociológicos, en otro artículo se analiza la situación del adulto mayor en Argentina y la violencia que puede sufrir dentro de su entorno familiar, que no siempre es física. Con base en normas internacionales conocidas (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, Reglas de Brasilia) y en otras específicas argentinas (Constitución Nacional, Ley N° 24.417 sobre Protección contra la Violencia Familiar, Ley N° 26.485 sobre la Ley de Protección Integral a las Mujeres...) se estudia dicha situación de los adultos mayores y el grado de violencia que este colectivo puede sufrir, que va más allá de la estricta violencia más grave, pues también se toman en consideración el abandono, el ignorar a esa persona mayor, el desplazarlo de su hogar o el que la familia se apodere de sus bienes materiales, aprovechando su fragilidad, falta de memoria o dependencia, llegando a la conclusión de que no sólo la legislación no se cumple, sino que los ciudadanos, no respetan o hacen respetar todos los derechos del adulto mayor. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta paliarlo, con varios programas de adultos mayores, entre los que se encuentra Actividades Intergeneracionales. Diversa jurisprudencia apoya el análisis realizado, así como el trabajo de campo del Patrocinio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Por último, nos referimos a dos artículos que abordan diversos estudios sociológicos. El primero de ellos relativo a las mujeres indígenas que son adultas mayores en el Sur de Sonora, México, y que viven en condiciones de vulnerabilidad muy alta, de tal forma que hasta las necesidades más básicas son algo de difícil consecución para ellas, siendo urgente la reformulación de políticas públicas y la exigencia de que sean puestas en marcha a corto plazo. El estudio que realizan los autores se refiere

a la alimentación, la educación de las mismas y sus oportunidades ocupacionales, centrándose en la primera de las cuestiones: su alimentación. Tras realizar un análisis sobre el envejecimiento de la población a nivel mundial, apreciando que el número de adultos mayores crece a un alto ritmo y que las problemáticas a las que se enfrentan se agudizan, el trabajo pone de manifiesto que las mujeres indígenas son un grupo vulnerable que enfrentan una triple desventaja: ser mujeres, ser pobres y ser indígenas. Aunque se han estado produciendo unos procesos migratorios de hombres y mujeres indígenas, lo que ha motivado que las mujeres indígenas vayan adquiriendo nuevos roles, pasando de ser mujeres subordinadas a colaborar en el sostenimiento de la familia e incluso a ser cabezas de familia, lo cual ha generado un mayor reconocimiento por parte del sexo opuesto y les va otorgando un mayor empoderamiento poblacional.

El segundo analiza el papel de las personas adultas mayores en diferentes películas. Ciertamente no han sido con frecuencia los grandes protagonistas de los argumentos de las películas, pero también han tenido un sitio en la historia cinematográfica. La autora de este trabajo analiza diferentes películas para tener una amplia visión de personajes ancianos. Son películas de diferentes países y de variados géneros. El cine se presenta como una importante herramienta para poder reflexionar sobre la sociedad, sobre los problemas cotidianos, dónde pueden verse representadas diversas realidades sociales. Las películas que abordan la vida de las personas ancianas suelen hacerlo de dos formas diferentes: nos presentan a las adultas y a los adultos mayores bien como personas joviales que son parte de una cultura joven (como expresa la autora es una suerte de representación del fenómeno de “juventud eterna”) o bien como personas frágiles, enfermas, limitadas por su edad, dependientes de otras personas. A lo largo de la Historia del Cine puede observarse también cómo el proceso de envejecimiento ha sido utilizado incluso como material para películas de terror, en unos casos o, en otros, especialmente en el género fantástico, los ancianos han sido representados como personas sabias y guías para los protagonistas. Por lo tanto, podemos hablar de muy distintos tratamientos con respecto a ellas. El análisis de cada una de las películas que son objeto de estudio de este artículo nos muestran datos muy interesantes sobre la materia.



## PROLOGUE (français)

C'est un honneur pour moi de rédiger la préface de ce numéro de la revue numérique TraHs, du Réseau ALEC (Réseau International pour l'Amérique Latine, l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes), de l'Université de Limoges (France), qui traite d'un sujet d'actualité inquiétant: le problème des personnes âgées, sous le titre spécifique de "ADULTES ÂGÉS: POPULATION VULNÉRABLE?"

Je remercie la directrice de la revue, la Professeure des Universités Dominique Gay-Sylvestre, et la coordinatrice de ce numéro, la Professeure Hilda Eleonora Vallet, qui ont pensé à moi pour mener à bien ce travail.

Le thème des personnes âgées est lié au concept de "vulnérabilité", car ces personnes risquent davantage de subir un préjudice physique ou moral, voire financier et même sexuel, que d'autres groupes de personnes.

La vulnérabilité potentielle vient souvent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation extrinsèque - par opposition aux hypothèses de « faiblesse », qualité intrinsèque des personnes. Nous faisons donc référence, ici, au fait que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables et que cette situation de vulnérabilité vient souvent de l'extérieur ou d'autres personnes qui peuvent les blesser en utilisant n'importe quelle formule (physique, morale, psychologique, etc.)

On pourrait être amené à penser que les deux concepts "vulnérabilité" et "faiblesse" sont inextricablement liés mais, bien que ce soit le cas le plus fréquent, il n'en est pas toujours ainsi. Il existe des groupes vulnérables sans que les personnes qui les constituent soient considérées comme faibles ou particulièrement fragiles, bien qu'il soit également vrai que les plus faibles sont, dans la plupart des cas, les plus susceptibles de subir des blessures extérieures et doivent donc être considérées comme vulnérables, comme cela arrive souvent dans le cas des personnes âgées.

À différents moments de l'histoire de l'humanité, on constate que certains groupes de personnes vulnérables ont été blessés et que cela s'est produit faute de protection juridique. Des blessures se sont produites parce qu'ils ne bénéficiaient pas d'une protection adéquate du fait de leurs caractéristiques ou conditions particulières - les normes juridiques ne se préoccupant pas d'eux ou n'ayant pas été en mesure de le faire correctement.

Les personnes âgées peuvent souffrir, en particulier à partir d'un âge avancé, de différents types de handicaps (physiques, sensoriels, psychiques) – sans compter que certaines personnes souffrent déjà, dès la naissance, d'une maladie ou d'un accident. Pour cette raison, elles ne peuvent subvenir correctement à leur personne ou gérer leurs avoirs ; en d'autres termes, elles ne peuvent défendre leurs intérêts.

Dans la plupart des pays, les réglementations en vigueur, internationales et internes, ont trop longtemps oublié les conditions de vulnérabilité des personnes âgées. L'ONU a pris en considération plusieurs groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, sur lesquels elle a étendu sa protection et non sur d'autres groupes. Les droits des personnes susmentionnées ont été spécifiquement reconnus, même s'il est également vrai que cela a influé sur la protection d'autres groupes, de sorte que des droits spécifiques ont également été spécifiés pour d'autres groupes vulnérables, en raison de leur âge, par exemple.

À cet égard, nous estimons qu'il est fondamental de faire référence à deux normes internationales: la Convention sur la protection des adultes (La Haye, 2000) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 2006).

L'art. 1 de la première Convention détermine quels sont les destinataires de la Convention: "les adultes qui, en raison d'une diminution ou d'une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en mesure de défendre leurs intérêts", réglementant les mesures de protection (détermination de l'invalidité, institution d'un régime de protection, désignation d'un représentant et de ses fonctions ...), la compétence des États dans les cas précités et l'autorité susceptible de prendre de telles mesures...

Pour sa part, la Convention relative aux droits des personnes handicapées comprend différents principes de protection qui traitent de l'autonomie et de l'indépendance des personnes, du respect de leur dignité, de leur participation pleine et effective à la société, de l'égalité des chances ...

Il existe une circonstance incontestable et évidente: le vieillissement de la société. L'espérance de vie a considérablement augmenté ces dernières années. Ainsi, par exemple, dans l'Union européenne, alors qu'elle était de 73 ans en 1990, elle est passée à 79 ans en 2005 et se situe actuellement à 81,6 ans. Ce vieillissement suscite une préoccupation majeure quant à l'autonomie des adultes et des personnes âgées, l'aide dont ils peuvent avoir besoin et la nécessité manifeste d'obtenir une plus grande cohésion sociale dans des sociétés inclusives. Par conséquent, la protection juridique des personnes âgées doit être améliorée, dans les domaines civil et pénal et, même, dans les domaines administratif et du travail.

En droit civil nous observons la recherche de moyens alternatifs au processus d'incapacité ou de mesures adéquates et efficaces pour, par exemple, réglementer les visites des grands-parents chez leurs petits-enfants lorsque leurs parents y font obstacle. Dans le domaine pénal, nous ne connaissons pas vraiment la véritable dimension de la maltraitance envers les personnes âgées, mais il est clair que nous sommes confrontés à un problème social de plus en plus préoccupant. Mais, il n'existe pas de données fiables, car les personnes âgées ne peuvent pas les exprimer elles-mêmes dans la mesure où leurs conditions physiques ou mentales les en empêchent ; si elles sont capables de le faire, elles ne le font pas par peur des représailles de leur agresseur. Ces mauvais traitements, dont elles ne veulent pas qu'ils transcendent à l'extérieur, se produisent fréquemment au sein de la famille. Sur le plan administratif, des formules devraient être trouvées pour faciliter et aider à développer la vie de ces personnes dans les meilleures conditions. Au niveau du travail avec des formules qui garantissent une pension décente et suffisante, tout en évitant, en même temps, une discrimination supplémentaire dans le cas des femmes.

Pour les cas les plus graves (personnes âgées battues), la Déclaration de Toronto sur la prévention mondiale de la maltraitance des personnes âgées de 2003, définit la maltraitance comme "l'action unique ou répétée, ou l'absence de réponse appropriée, qui se produit dans toute relation où il y a une attente de confiance et qui cause des dommages ou de l'angoisse à une personne âgée". Il existe différentes formes d'abus: physique, psychologique, financier, sexuel..., voire même, la négligence, intentionnelle ou par omission. Et ce qui est commun à ces différentes situations, c'est, dans la plupart des cas, l'impossibilité d'extérioriser le problème et le manque de protection législative adéquate.

Nous constatons que le législateur et la société ont souvent oublié ces questions et que le moment est maintenant venu de les traiter dans leur intégralité.

Ce numéro dont j'ai le plaisir d'écrire le prologue, traite de la problématique susmentionnée, au pluriel. Douze auteurs, issus de différents horizons (Argentine, Brésil, Chili, Équateur, Espagne, France et Mexique), analysent la question sous des



perspectives très différentes, offrant ainsi une vision large, riche et multidisciplinaire sur le sujet.

Divers aspects juridiques, matériels et procéduraux - civils, pénaux et même en lien avec le travail - sont traités, ainsi que d'autres à caractère plus social. Nous nous référerons d'abord aux articles à contenu strictement légal, puis à ceux qui traitent de questions purement sociologiques.

Dans les différents articles qui composent ce numéro, les différentes questions sont analysées et traitées de manière sérieuse et rigoureuse. Lorsqu'il s'agit de questions plus juridiques, des références juridiques constantes, une jurisprudence et de nombreuses citations doctrinales sont incluses.

Les *Législations internes* de chacun des pays faisant l'objet de l'étude (diverses constitutions, certains codes civil et pénal, lois issues de procès, Loi Générale sur la Sécurité Sociale, Statut des Travailleurs, lois spéciales en la matière - Loi Organique espagnole pour l'Égalité effective des femmes et des hommes, Loi sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste, Loi française pour l'adaptation de la société au vieillissement, Loi argentine sur la médiation, Statut des personnes âgées du Brésil, Loi chilienne sur le traitement électronique des actes de procédure, Loi mexicaine sur les droits des personnes âgées ...), mais aussi la *législation internationale* (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Droits Fondamentaux de la Personne, Convention Interaméricaine sur la Protection des Droits des Personnes âgées ...) servent de support fondamental aux recherches menées.

Plusieurs études analysent la Convention Interaméricaine sur la Protection des Droits Humains des Personnes Âgées, dont les dispositions prévoient un progrès quant à la garantie de l'accès des personnes âgées à la justice ; mais elles notent également que la violence à l'égard des personnes âgées se poursuit, grandit avec le mépris qui en résulte pour leur droit d'accès à un processus équitable.

Certains articles abordent le sujet de manière plus générale, en effectuant une analyse globale aux niveaux national et international, puis en abordant des sujets plus spécifiques et en analysant directement d'autres aspects particulier qui touchent plus spécialement les adultes et les personnes âgées.

Le premier de ces travaux aborde l'hypothèse de la maltraitance envers les personnes âgées, sans distinction de genre, en décrivant des situations où elles sont privées de tout contact avec leurs petits-enfants et une multitude d'autres situations, qui touchent l'autre partie de l'équation, à savoir, en particulier les petits-enfants, garçons, filles, adolescents, qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Plusieurs instruments juridiques internationaux sont examinés et plus spécialement le système juridique argentin, à partir de situations où le refus de tout contact avec les petits-enfants est vu comme des actes de violences exercées contre les personnes âgées et la médiation considérée comme une ressource pour aborder et atténuer les conflits dus à cet empêchement.

La protection sociale des personnes âgées est également analysée à partir des mesures d'action positive dans la lutte contre la discrimination postérieure à l'emploi des personnes âgées. Il faut tenir compte de l'écart entre les hommes et les femmes en matière de protection sociale, qui constitue une discrimination à l'égard des femmes, parfois en raison de leur arrivée tardive sur le marché du travail ou de possibles interruptions liées à la maternité. Après une approche thématique sur la flexibilité possible quant à la détermination de l'âge de la retraite, la perspective de genre est définie dans le traitement du problème qui affecte les femmes âgées, en effectuant une évaluation critique des succès ou des erreurs commises dans ce cas,

au niveau législatif dans le système juridique espagnol, avec également quelques références jurisprudentielles, en analysant les transformations sociales et leurs répercussions en termes de genre, de contributions fictives ou la maternité et sa valeur en tant qu'élément de "contributivité".

Un autre ouvrage, du Mexique, suggère la création d'un nouveau droit procédural "gériatrique", étant entendu que, pour parler d'un véritable accès à la justice pour les personnes âgées, les procédures doivent être plus souples et plus rapides, même si l'on passe par la voie sommaire et sans autant d'exigences formelles. On pourrait penser au processus de conciliation procédural, et à la médiation si nécessaire à la recherche d'un nouveau modèle d'administration de la justice au service de cette nouvelle génération de personnes âgées de plus en plus nombreuse. Sont proposés une courte durée maximale de la procédure, d'exclure des clauses exceptionnelles, de fixer des dates d'audience dans un délai court, la présentation de preuves succinctes, la résolution d'incidents en une seule audience sans autre procédure que celle d'être entendue par les parties, en un langage simple, sans formalismes...

Une question transcendante qui est également abordée est celle qui fait référence aux mauvais traitements subis par les personnes du troisième âge du point de vue du droit pénal et de la criminologie, soulignant certaines données fondamentales telles que leur "invisibilisation" à ce niveau du droit. Une étude statistique sur la victimisation des personnes âgées en Espagne est réalisée, fournissant différents tableaux (pourcentages de la population adulte, délits dont sont victimes les personnes âgées, violence domestique à leur encontre, etc.). Le code pénal espagnol ne fait pas directement référence à la question de la vieillesse, bien qu'il envisage des vulnérabilités pouvant être dues à l'âge ou au handicap. Mais le droit pénal devrait être le dernier instrument à suivre. Il faudrait appliquer davantage de politiques sociales visant à résoudre ces situations.

L'accès à la justice pour les personnes âgées et la fracture numérique (informatique) existante constituent une question très importante. Le développement de modèles de justice en ligne exige que toutes les personnes puissent utiliser les technologies de la communication et de l'information (TIC), mais les personnes âgées ont de réelles difficultés à le faire. Le Plan stratégique 2018-2022 de la Commission Interaméricaine des télécommunications (CITEL) promeut l'inclusion numérique, en accordant une attention particulière à la population qui a les plus grandes difficultés d'accès, notamment les personnes âgées. Cette analyse faite dans une perspective internationale, en particulier à partir du droit interne chilien, montre l'impact de cette fracture numérique sur l'accès à la justice pour les personnes âgées.

Outre les articles strictement légaux, il en est d'autres qui font référence à des aspects sociaux, ou présentent une combinaison des deux, comme c'est le cas de l'écrit qui analyse la protection des droits sociaux et des garanties constitutionnelles relatives aux personnes âgées, avec une référence particulière au vieillissement de la population au Brésil, sa vulnérabilité et ses particularités. Sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et des droits fondamentaux de la personne, l'auteur part de la réglementation fondée sur le Statut des Personnes Agées dans ce pays et le rôle des Conseils Municipaux en charge de ces mêmes personnes, qui ont permis une avancée dans leur gestion et les politiques sociales. Pour ce faire, elle utilise les données statistiques de ces dernières années et réfléchit aux problèmes d'aide en matière de santé, de logement ou de participation sociale.

Il en va de même pour le travail consacré à l'étude, en France, des personnes âgées et à leur vulnérabilité. Le préambule de la Constitution française garantit à tous, et tout spécialement aux plus vulnérables, notamment les travailleurs âgés, la protection de la santé, la sécurité physique, le repos et les loisirs. Mais ont-ils besoin

d'une protection spéciale? Se sentent-ils vulnérables et le sont-ils vraiment? En France, tout comme dans d'autres pays développés, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et sont moins fragiles et vulnérables, bien qu'elles n'aient aucun poids dans le dialogue social. Une nouvelle catégorie de citoyens est née: celle des personnes âgées autonomes et en bonne santé qui ne souhaitent pas être classées dans la catégorie "personnes âgées". En 2016, la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement est entrée en vigueur. Elle actualise certaines mesures déjà en vigueur et propose d'améliorer le quotidien des personnes âgées, de leurs proches et de leurs aidants, bien qu'il soit important d'accorder une attention particulière à réalité et considérer que si certaines personnes âgées sont condamnées à des peines doubles, triples, voire plus (faiblesse financière, maladies chroniques, marginalisation sociale et difficultés d'accès aux soins ou aux services d'aide), les classifications sociales peuvent entraîner des stigmatisations, d'où la nécessité de construire une société inclusive à l'avenir.

Conjuguant également les aspects juridiques et sociologiques, un autre article analyse la situation des personnes âgées en Argentine et les violences, pas toujours physiques, pouvant survenir au sein de leur environnement familial. A partir des normes internationales bien connues (Convention interaméricaine sur la Protection des Droits des Personnes Agées, Règles de Brasilia) et d'autres règles spécifiques à l'Argentine (Constitution Nationale, loi n° 24 417 sur la protection contre la violence familiale, loi n° 26 485 sur la Protection Globale des Femmes ...), la situation des personnes âgées est étudiée ainsi que le degré de violence subit par ce groupe, qui dépasse les violences les plus graves. En effet, l'abandon est également pris en compte ainsi que le fait d'ignorer la personne âgée, la déplacer de son domicile ou le fait que la famille s'empare de ses biens matériels, profitant de sa fragilité, de son manque de mémoire ou de sa dépendance. L'étude conclue que non seulement la législation n'est pas respectée, mais que les citoyens eux-mêmes ne respectent pas tous les droits de la personne âgée. Le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires tente de pallier ce problème en proposant plusieurs programmes destinés aux personnes âgées, notamment des activités intergénérationnelles. Divers travaux jurisprudentiels étayaient cette analyse ainsi que le travail de terrain réalisé grâce au parrainage juridique de la faculté de droit de l'Université de Buenos Aires.

Enfin, nous nous référons à deux articles qui traitent de diverses études sociologiques. La première concerne les femmes indigènes âgées du sud de Sonora, au Mexique, vivant dans des conditions de très grande vulnérabilité, de telle sorte que même les besoins les plus élémentaires sont difficiles à satisfaire, d'où l'urgence à reformuler des politiques publiques et à exiger qu'elles soient mises en œuvre à court terme. L'étude réalisée par les auteurs porte sur l'alimentation, l'éducation et leurs perspectives professionnelles, en se concentrant sur le premier des problèmes: leur nutrition. Après avoir analysé le vieillissement de la population au niveau mondial et montré que le nombre d'adultes âgés croît à un rythme soutenu et que les problèmes auxquels elles sont confrontées s'aggravent, le travail présenté révèle que les femmes indigènes constituent un groupe de femmes vulnérables confrontées à un triple désavantage: être une femme, être pauvre et être indigène et ce, malgré l'impact des processus migratoires d'hommes et de femmes indigènes qui entraînent l'apparition de rôles, nouveaux, chez les femmes indigènes, qui passent de femmes subordonnées à celles qui collaborent au soutien de la famille, assumant même le rôle de chef de famille, générant une plus grande reconnaissance de la part du sexe opposé et une plus grande autonomisation au sein de leur communauté.

Le second article analyse le rôle des personnes âgées dans différents films. Certes, ils n'ont pas souvent été les principaux protagonistes des scénarii, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont également eu une place dans l'histoire du cinéma.

L'auteur de ce travail analyse différents films pour avoir une vision la plus large possible de rôles représentant des personnages âgés. Elle a recours à des films de différents pays et de genres différents. Le cinéma est présenté comme un outil de réflexion important sur la société, les problèmes quotidiens, à travers lequel différentes réalités sociales peuvent être représentées. Les films qui traitent de la vie des personnes âgées le font généralement de deux manières différentes: ils nous présentent les personnes âgées soit comme des personnes joviales appartenant à une culture jeune (comme le dit l'auteur, il s'agit d'une sorte de représentation du phénomène de "Jeunesse éternelle") ou bien comme des personnes fragiles, malades, limitées par leur âge, dépendantes d'autres personnes. Tout au long de l'histoire du cinéma, on peut également observer comment le processus de vieillissement a été utilisé indistinctement, soit comme matériau pour les films d'horreur, ou plus spécialement dans le genre fantastique ; ou bien encore en incarnant le statut de sages et de guides pour les protagonistes. L'analyse de chacun des films qui font l'objet de cette étude nous montre des données très intéressantes sur le sujet.

## PROLOGUE (English)

It is an honor for me to preface this issue of the magazine TraHs, of the ALEC NETWORK (International Network Latin America, Africa, Europe and the Caribbean), of the University of Limoges (France), versed on a worrying and topical issue the problem of the elderly, under the specific title of "OLDER ADULTS: VULNERABLE POPULATION?"

I thank the director of the magazine, Dr. Dominique Gay-Sylvestre, and the coordinator of this special issue, Dr. Hilda Eleonora Vallet, who have thought of me to carry out this work.

The theme of adults and the elderly (elderly and elderly) is linked to the concept of "vulnerability", as these people may be at greater risk of receiving any physical or moral injury, or financial and even sexual, than other groups of people.

It must be assumed that the possible situation of vulnerability frequently comes from outside, that is, it is an extrinsic situation - as opposed to the assumptions of "weakness", which is an intrinsic quality of people. So, we are referring to the fact that the elderly are especially vulnerable and that situation of vulnerability often comes from outside, from other people who can injure them using any formula (physical, moral, psychological ...)

It could be thought that both concepts - "vulnerability" and "weakness" - are inextricably linked and, although it is the most frequent, it is not always the case. There are vulnerable groups without the people who constitute them being considered weak or especially fragile, although it is also true that the weakest are, in most cases, the most susceptible to suffering external injuries and, therefore, to be framed in groups classified as vulnerable, as often happens in the case of the elderly.

Looking at different times throughout the history of humanity we can see that certain behaviors have been repeated in which vulnerable groups of people have been injured and that this has happened because of the lack of legal protection of them. By not having adequate protection according to their characteristics, their special circumstances, these injuries have occurred. The legal norms have not worried about these people or have not been able to do it properly.

Older adults may begin to suffer, especially from certain advanced ages, different types of disabilities (physical, sensory, psychic) - leaving aside that certain people already suffer from birth or as a result of an illness or an accident- . And because of this they cannot properly manage their person or their assets, that is, they cannot look after their interests.

The existing regulations, both international and internal in most countries, have for too long forgotten the conditions of vulnerability of older adults. The UN took into consideration several especially vulnerable groups such as children, women and people with disabilities, on which it has been projecting its protection and not on other groups. The rights of the aforementioned persons have been specifically recognized, although it is also true that this has influenced the protection of other groups, so that specific rights are also specified for other vulnerable groups, for example, due to age. .

In this matter, we consider it fundamental to refer to two international standards: the Convention on the Protection of Adults (The Hague, 2000) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 2006).

In article 1 of the first Convention it is determined who are the recipients of the Convention: "adults who, due to a decrease or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to look after their interests", regulating protection measures (determination of disability, institution of a protection regime, appointment of a representative and its functions ...) and the competence of the States in this regard, determining the authority that can take such measures ...

For its part, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities includes different protection principles that deal with the autonomy and independence of people, respect for their dignity, full and effective participation in society, equality of opportunities ...

There is an incontestable and obvious circumstance: the aging of society. Life expectancy has increased considerably in recent years, so that, for example, while it was in the European Union for 73 years in 1990, it rose to 79 years in 2005 and is currently 81.6 years.

This aging leads to a major concern for the autonomous and assisted life of adults and older adults and the clear need to obtain a higher social cohesion with inclusive societies. Therefore, the legal protection of the elderly must be improved, both in the civil and criminal spheres and even in the administrative and labor fields.

We can cite in the civil aspect the search for alternative means to the incapacitation process, or adequate and effective measures to, for example, regulate the visits of the grandparents to the grandchildren when they are not provided by the parents. In the criminal field, we do not really have an accurate knowledge of the real dimension of mistreatment of the elderly, but it is clear that we are facing a social problem with worrying and increasing numbers. There are no reliable data since the elderly themselves can not express it because their physical or mental conditions prevent it, or because, being able to do so, they do not do it for fear of reprisals from their abuser, and due to the fact that mistreatment frequently occurs in the family environment and do not want it to transcend abroad. Administratively, they should also look for formulas that facilitate and help develop the lives of these people in the best conditions. And in the labor order with formulas that guarantee a decent and sufficient pension, avoiding at the same time an added discrimination in the case of women.

In the most serious case, in the case of battered elderly people, according to the Toronto Declaration for the Global Prevention of Elder Abuse of 2003, abuse is defined as "the single or repeated action, or the lack of appropriate response, which occurs within any relationship where there is an expectation of trust and which produces damage or anguish to an elderly person. " There are several forms of abuse: physical, psychological, financial, sexual ..., or even may, without more, reflect a negligence, whether intentional or omission. And what is common to these different situations is the impossibility of externalizing the problem in most cases and the lack of adequate legislative protection.

We see that the legislator, and society, have been frequently forgetting these issues and that the time has come to be addressed in its entirety.

This special issue that I now have the pleasure of prologar addresses the aforementioned problematic in a plural form. Twelve authors, from different backgrounds (Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Spain, France and Mexico), analyze the issue from very different perspectives, which provides a broad, rich and multidisciplinary view of the subject.



Varied, material and procedural legal aspects -both civil, as criminal and even labor- are treated, as well as others of more social character. We will refer first to articles with strictly legal content and then to those that deal with purely sociological matters.

In the different articles that make up this special issue, the various matters dealt with in a serious and rigorous way are analyzed, and in the case of the most legal ones, with constant legal references, some case law and numerous doctrinal quotations.

The internal regulations of each of the countries that are the subject of the study (various Constitutions, some civil and criminal codes, laws of prosecution, General Social Security Law, Workers' Statute, special laws on the subject - Spanish Organic Law for the Effective Equality of Women and Men, Law on Measures of Comprehensive Protection against Gender Violence, French Law on the Adaptation of the Society to Aging, Argentine Law on Mediation, Brazilian Statute of the Elderly, Chilean Law on Electronic Processing of Proceedings , Mexican Law on the Rights of Older Persons ...), but also international legislation (Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Rights of the person, Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of the Elderly ...). All this serves as a fundamental support for the research carried out.

Several studies analyze the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons, whose provisions entail an advance in ensuring access to justice for older adults, but also notes that violence against the elderly continues growing with the consequent disregard of their right of access to a fair process.

Some articles raise the subject in a more general way, carrying out a global analysis at national and international levels, then going on to more specific topics and in others directly analyzing specific aspects that particularly affect adults and the elderly.

The first of the works addresses the assumption of abuse to the elderly, collecting situations related to the impediment of contact with grandchildren, which affects all types of older adults, without distinction of gender, and a multitude of situations and environments. And it is more, the affectation goes beyond the adults themselves and reaches the other part of the equation, and especially to their grandchildren, children and adolescents, who have not reached the age of majority. Several international legal instruments are examined, stopping later, in the existing situation in the Argentine legal system, collecting situations referred to the impediment of contact with grandchildren as an act of violence against the elderly or mediation as a resource for the approach and mitigation of said impediment.

Social protection in old age is also analyzed with measures of positive action in the fight against post-employment discrimination in the case of older adults. The gender gap in social protection must be taken into account, which discriminates against women, sometimes due to their late entry into the labor market or because of possible interruptions linked to maternity. After a thematic approach on the possible flexibility in the determination of the retirement age, the gender perspective is defined in the treatment of the problem that affects the female workers of age, making a critical assessment of the successes or errors committed in the latter years at the legislative level in the Spanish legal system, also with some jurisprudential reference, analyzing social transformations and their repercussions in terms of gender, fictitious contributions or maternity and its value as an element of "contributivity".

Another work presents us from Mexico a suggestive proposal for the creation of a new "Geriatric" Procedural Law, on the understanding that in order to speak of real access to justice for older persons, procedures that are much more necessary are needed. agile and more quickly, even than in the summary way and without so many formal requirements. One could think about the conciliation process, and mediation if necessary, looking for a new model of Administration of Justice at the service of this new generation of elderly people more and more numerous. It is proposed a short maximum duration of the procedure, exclude extraordinary terms, set short hearing dates and presentation of evidence, resolution of incidents in a single hearing without further proceedings than to be heard by the parties, use of simple language, without formalities ...

A transcendental matter that is also addressed is the one referring to ill-treatment of the Third Age from the perspective of criminal law, and criminology, pointing out some fundamental data such as the "invisibilization" of it. A statistical study of the victimization of older adults in Spain is carried out, providing different tables (with percentages of adult population, crimes in which older adults are victims, older victims of domestic violence ...). The Spanish Penal Code does not have a direct reference to the issue of old age, although it does contemplate vulnerabilities that may be due to age (basically of a minority) or disability. But criminal law should be the last ratio, the last instrument to follow, what should be done is to apply more social policies aimed at solving these situations.

A very important issue is the access to justice for the elderly and the existing digital divide. The development of e-Justice models requires that all people can use communication and information technologies (ICT), but older people have real difficulties in doing so. The Strategic Plan 2018-2022 of the Inter-American Telecommunication Commission (CITEL) promotes digital inclusion, paying special attention to the population with the greatest difficulty of access, among them the elderly, which is analyzed from an international perspective and also from the Chilean domestic law, especially how this age gap affects access to justice.

Apart from the strictly legal articles, others refer to social aspects, or present a combination of both, as is the case of the work that analyzes the protection of social rights and constitutional guarantees with respect to the elderly, with special reference to the aging of the population in Brazil, its vulnerability and its peculiarities. Taking as a basis the Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Rights of the Person, it descends to the regulation that the Statute of the Elderly in that country and the role of its Municipal Councils of the Elderly, which have fostered progress in the management and social policies, making use of statistical data of recent years, reflecting on assistance in health, housing or social participation.

The same happens with the work that is dedicated to the study in France of the elderly and their vulnerability. The Preamble to the French Constitution guarantees everyone, especially the most vulnerable - including older workers - the protection of health, physical safety, rest and leisure. But do you need more special protection? Do they feel vulnerable and are they really? Older people are living longer and are less fragile and vulnerable in France, as in other developed countries, although they have no weight in social dialogue. A new category of citizens appears: the autonomous, healthy elderly, who do not wish to be categorized as "old". In 2016 the Law on the Adaptation of the Society to Aging came into force, which updates some measures already in force and proposes to improve the daily life of the elderly and their relatives and caregivers, although we must pay attention to the real situation and realize that although some older people are condemned to double,

triple or even more sentences (financial weakness, chronic diseases, social marginalization and difficulties in accessing care or assistance services), social classifications can be the gateway to stigmatization. It is necessary to build an inclusive society in the future.

Also conjugating legal and sociological aspects, another article analyzes the situation of the elderly in Argentina and the violence that may occur within their family environment, which is not always physical. Based on well-known international standards (Inter-American Convention on the Protection of the Rights of Older Persons, Brasilia Rules) and other specific Argentine ones (National Constitution, Law No. 24,417 on Protection against Family Violence, Law No. 26,485 on the Law of Comprehensive Protection for Women ...) this situation of older adults is studied and the degree of violence that this group can suffer, which goes beyond the most serious violence, because abandonment is also taken into consideration, ignoring that older person, displacing him from his home or the family taking over his material assets, taking advantage of his fragility, lack of memory or dependence, arriving at the conclusion that not only the legislation is not met, but the citizens, not respect or enforce all the rights of the older adult. The Government of the Autonomous City of Buenos Aires tries to palliate it, with several programs for older adults, among which is Intergenerational Activities. Various jurisprudence supports the analysis carried out, as well as the fieldwork of the Legal Sponsorship of the Faculty of Law of the University of Buenos Aires.

Finally we refer to two articles that address various sociological studies. The first one related to indigenous women who are older adults in the South of Sonora, Mexico, and who live in conditions of very high vulnerability, in such a way that even the most basic needs are something difficult for them to achieve, being urgent the reformulation of public policies and the requirement that they be implemented in the short term. The study carried out by the authors refers to food, education and their occupational opportunities, focusing on the first of the issues: their nutrition. After analyzing the aging of the population worldwide, appreciating that the number of older adults grows at a high rate and that the problems they face are becoming more acute, the work reveals that indigenous women are a group vulnerable women who face a triple disadvantage: being women, being poor and being indigenous. Although migratory processes of indigenous men and women have been taking place, which has motivated indigenous women to acquire new roles, from subordinate women to collaborate in the support of the family and even to be heads of family, which it has generated greater recognition by the opposite sex and is giving them greater population empowerment.

The second analyzes the role of older adults in different films. Certainly they have not often been the main protagonists of the arguments of the films, but they have also had a place in film history. The author of this work analyzes different films to have a broad vision of elderly characters. They are films from different countries and from different genres. The cinema is presented as an important tool to be able to reflect on society, on everyday problems, where different social realities can be represented. The films that deal with the lives of elderly people usually do so in two different ways: they present us to adults and older adults as well as jovial people who are part of a young culture (as the author expresses it is a kind of representation of the phenomenon of "Eternal youth") or as fragile, sick people, limited by their age, dependent on other people. Throughout the History of the Cinema it can also be observed how the aging process has been used even as material for horror films, in some cases or, in others, especially in the fantastic genre, the elderly have been represented as wise people and guides for the protagonists. Therefore we can talk about very different treatments with respect to them. The analysis of each of the

films that are the object of study in this article show us very interesting data on the subject.